
Cuba: la reforma económica, la reestructuración social y la política

Haroldo Dilla Alfonso¹

*Instituto de Filosofía
La Habana, Cuba*

Resulta axiomático afirmar que la sociedad cubana contemporánea cambia al calor de la reforma económica, y que todo ello repercute en la política, produciendo redistribuciones de poderes que tarde o temprano se deberán expresar en las instituciones políticas. Menos claro es, sin embargo, cuáles podrían ser los resultados sistémicos de este proceso. Una idea central que anima este artículo es que la reforma está creando un entramado social básico que pudiera conducir a una restauración capitalista en el país. Otra idea central es que éste no es un resultado inevitable y que existen vías alternativas para la continuidad socialista que implicaría potenciar al sujeto popular en los nuevos escenarios creados.

Nivelación y movilidad social

Cualquier valoración sobre la composición social cubana y sus efectos en la política, incluso en sus tendencias actuales, tiene que partir de un hecho histórico: la radicalidad de la Revolución iniciada en 1959, que condujo a la virtual liquidación de los sectores burgueses y de buena parte de la clase media, los cuales emigraron o experimentaron un proceso de proletarización. La sociedad, remitida así al concepto estricto de "pueblo", fue paulatinamente organizándose en torno al predominio de formas sociales y estatales de propiedad de los medios de producción.

Al mismo tiempo, esta nivelación social fue acompañada de un fuerte proceso de movilidad ascendente de las mayorías, apoyado en programas estatales de provisión de empleos y de servicios sociales. Sólo a modo de ilustración, en 1953 el 57% de la población habitaba en zonas urbanas,

los analfabetos eran algo menos de una cuarta parte de la población y sólo el 11% de ésta poseía un nivel medio o superior de escolaridad. En 1981 estos índices habían variado significativamente. El 69% de la población vivía en zonas urbanas, el analfabetismo había sido virtualmente liquidado y el 41% de la población poseía más de 6 grados de enseñanza. Hacia 1989, último año en que se publicaron los anuarios estadísticos, se informaban algo más de 10.5 millones de habitantes, el 73% de los cuales vivía en zonas urbanas. Aproximadamente el 38% de la población total habitaba en ciudades de más de 100 mil habitantes. El número de técnicos y profesionales rondaba el medio millón, mientras que cerca de 140 mil personas se encontraban cursando la enseñanza superior. En 1989 se graduaron de las universidades cubanas 33,199 personas, más de la mitad de las cuales eran mujeres (datos extraídos del Comité Estatal de Estadísticas de Cuba 1981, 1983, 1989).

Esta intensa movilidad social, aun cuando conducía a una diferenciación objetiva de los sujetos, no repercutió proporcionalmente en un autorreconocimiento de las identidades sectoriales, lo cual estaba condicionado por diversos factores que tendían a enfatizar el concepto de "pueblo" como vehículo sociopolítico de la transformación social y la defensa nacional. El sistema político dio cuenta de esta situación mediante su adscripción al modelo leninista de organizaciones sectoriales que actuaban como "correas de transmisión" entre la totalidad de la población y la "vanguardia política" organizada en el Partido Comunista.

La historia se ha ocupado de mostrar tanto las virtudes como los inconvenientes de este tipo de ordenamiento de la regulación sociopolítica. Mientras se trató de una sociedad con un bajo nivel de lo que Anthony Giddens (1996) ha denominado "universalización y reflexividad social", este esquema de regulación política funcionó con eficacia. Por un lado, permitió enfrentar con éxito el peligro externo representado verazmente por la agresividad norteamericana y, al menos hasta los años setenta, por el aislamiento regional impuesto al país. En un segundo plano, son perfectamente conocidos los logros sociopolíticos alcanzados por la sociedad cubana, tales como un bienestar modesto pero equitativo y ajeno al consumismo, una cultura política solidaria y un vasto entramado de participación y movilización popular, entre otros.

Sin embargo, este esquema contenía serias contradicciones emanadas de sus propósitos declarados de socialización del poder —lo que en el discurso oficial era enunciado como el establecimiento de un auténtico poder del pueblo— y su apropiación paulatina por una capa burocrática emergente durante los años sesenta y definitivamente consolidada en la década siguiente a la sombra de un sistema económico severamente centralizado y de un aparato político de igual signo y con una alta

Aquí no se trata, como en otros países latinoamericanos, de una simple variación de un código operacional capitalista, sino de la reestructuración radical de la economía política, de los modos de regulación social y de la producción ideológica-cultural prevalecientes en décadas anteriores.

capacidad de convocatoria y de producción ideológico-cultural. La burocracia comenzó a asumir un papel cada vez más importante en la mediación entre el liderazgo revolucionario y las masas populares, en la asignación de recursos, en la comunicación política y en el control y la promoción social, con la consiguiente extensión de las relaciones paternalistas-clientelistas.

En términos sistémicos, la consolidación de un estamento burocrático sólo pudo conseguirse al precio de una detención del proceso de socialización del poder y por consiguiente del congelamiento del desarrollo socialista del proyecto.² Pero esencialmente dejó en pie una contradicción entre la alta calificación del sujeto social y la rigidez de los mecanismos de control sociopolítico, lo que tendía a producir disfuncionalidades tales como la apatía y la anomia políticas, lo que en Cuba se ha consagrado con el término de “doble moral”.³ Esta situación comenzó a experimentar un cambio radical cuando, desde fines de los ochenta, la sociedad cubana se vio obligada a buscar su inserción al mercado mundial capitalista sobre bases competitivas y, en consecuencia, a producir un rediseño interno mediante lo que hoy se conoce como la “reforma económica”.⁴

El proceso de adaptación de la economía cubana a las exigencias del mercado mundial guarda notables diferencias con procesos dirigidos al mismo fin en otros países latinoamericanos. Por un lado, la dirigencia política nacional ha tratado de evitar los aspectos más gravosos del ajuste, manteniendo la gratuidad y el acceso universal a los servicios sociales fundamentales y proveyendo a la población de un consumo alimentario básico subsidiado, al mismo tiempo que el Estado conserva un papel significativo, como propietario y como regulador. Por otro lado, la apertura de Cuba al mercado mundial se realiza en un contexto

marcado por la agresividad de los Estados Unidos y su intento de estrechar el bloqueo económico a un nivel francamente genocida, lo que imprime a la reforma una sensación de riesgo inminente e implica costos superiores en todos los sentidos. Por último, aquí no se trata, como en otros países latinoamericanos, de una simple variación de un código operacional capitalista, sino de la reestructuración radical de la economía política, de los modos de regulación social y de la producción ideológica-cultural prevalecientes en décadas anteriores. Posiblemente sea éste último el signo más trascendente del proceso de reforma: la paulatina colonización mercantil de los ámbitos de acción social y por consiguiente el planteamiento de retos multidimensionales que atañen al tema central de la política: la distribución del poder.

Reforma económica y reestructuración social

En las condiciones presentes es poco probable la realización de un análisis empíricamente fundamentado del proceso de reestructuración que experimenta la sociedad cubana. En primer lugar, se trata de un proceso de cambios tan incipiente como vertiginoso, lo que expone al analista a ser sobrepasado por la marcha de los acontecimientos. Por otro lado, no se publican estadísticas oficiales en Cuba desde 1989, lo que obliga a procesar informaciones dispersas y poco diáfanas. Por esta razón, las páginas siguientes tratan de describir sólo aquellas tendencias de cambio más visibles, haciendo notar que me refiero casi exclusivamente a las transformaciones socioclasistas, no así a otras dimensiones (tales como géneros y generaciones) que merecen un tratamiento especial.

Un nuevo bloque social

Desde la óptica que aquí nos ocupa el resultado más sobresaliente del proceso de apertura y reforma económica ha sido la incipiente conformación de un nuevo bloque social —que aquí denominaremos “tecnocrático-empresarial”— y en el cual es posible distinguir tres componentes fundamentales. Un primer componente de este bloque emergente está ubicado en el ámbito de la inversión extranjera. Según las cifras disponibles, en 1994 existían en Cuba 176 asociaciones con capital extranjero, lo que ascendía a unos 1,500 millones de dólares. Pertenecían a 36 países y estaban establecidas en 26 ramas. Al mismo tiempo, se contaba con la presencia de unas 400 firmas comerciales. Los datos citados fueron ofrecidos en la XII Feria Internacional de La Habana. La apertura de la feria estuvo a cargo de un alto dirigente político quien aseguró a los empresarios allí reunidos:

Les ofrecemos un país ordenado. Una política de apertura a la inversión de capital coherente e irreversible. Una infraestructura económica coherente y extendida. Un sector productivo en proceso de cambio hacia la eficiencia. Un pueblo trabajador y abnegado con un alto nivel educacional y técnico. Una sociedad que no conoce del terrorismo ni de las drogas. Les ofrecemos una nación soberana y un gobierno honrado e incorruptible (*Cuba Foreign Trade* 1994).

Un año más tarde el número de inversiones ascendía a 212, y en un informe de principios de 1996 se vaticinaba un crecimiento del 27%. Por entonces las empresas vinculadas al capital foráneo empleaban a 53 mil trabajadores, alrededor del 5% de la fuerza laboral empleada (*Granma* 1996).

En la misma medida en que se trata regularmente de asociaciones con el Estado, este sector está estrechamente relacionado con una capa de empresarios y gerentes nacionales que comparten experiencias vitales, modos de vida y aspiraciones sustancialmente diferentes del resto de la población. Las tendencias actuales de la economía apuntan hacia la expansión de este sector, con la singularidad de que esta expansión se produce en las áreas más dinámicas de la economía, lo que le otorga una mayor relevancia por su posición cualitativa que por cualquier otra consideración cuantitativa.

El segundo componente de este bloque emergente estaría formado por los directivos de las empresas estatales, que han logrado posiciones ventajosas en el mercado mundial (se calcula que cerca de un 20% de las empresas nacionales) y por consiguiente cuotas superiores de autonomía. Estas nuevas atribuciones son incompatibles con la tradicional figura del administrador de bienes públicos en el marco de la economía centralmente planificada, siempre encerrado en la trágica triada del no saber, no poder o no querer. En su lugar emerge un nuevo tipo de empresario nacional, más preocupado por la maximización de ganancias que por otras consideraciones políticas. El número de empresas ubicadas en este rango también deberá seguir aumentando con el transcurso de la reforma.

Un tercer componente potencial de este bloque está representado por aquellas personas (tales como campesinos acomodados, intermediarios comerciales y proveedores de servicios) que han acumulado fuertes sumas monetarias mediante la especulación en el mercado negro, frecuentemente a expensas de los recursos estatales. Dado que la mayor parte de las fortunas acumuladas por este sector tiene un origen ilícito, es imposible cuantificar su potencial económico.

Pero es posible acercarse a su dimensión a través del análisis de la estructura de las cuentas corrientes, donde se deposita aproximadamente el 60% de la liquidez monetaria y que ha presentado en los últimos años una preocupante tendencia a la concentración. Hacia mediados de 1995 se informaban cerca de 6 millones de cuentas de ahorro que guardaban 5,890 millones de pesos. Pero de este total sólo el 14.1% concentraba el 77.8% de los ahorros y, lo que es aún más sobresaliente, el 0.5% superior contenía el 17% de los ahorros (Banco Nacional de Cuba 1995).⁵

Con las acciones de liberalización en los mercados agropecuarios y de productos industriales, así como con la apertura del trabajo por cuenta propia, este sector no sólo ha incrementado y "blanqueado" sus fortunas, sino que también ha ganado un mayor control de los circuitos de circulación y realización del mercado interno. Es esperable que en un futuro no lejano este sector tendrá un papel inversionista en la pequeña y mediana empresa y en contrataciones con el sector formal de la economía, lo que le ampliará sus posibilidades de acumulación.

Cambios en la clase obrera

Desde la acera opuesta, otro sector social que ha experimentado notables cambios internos es el correspondiente a los asalariados estatales, particularmente la clase obrera. Hasta 1989 alrededor de 3.5 millones de personas, el 94% de la fuerza de trabajo empleada en el sector civil, eran asalariados de la economía estatal, organizados sindicalmente en su inmensa mayoría y amparados por un código muy paternalista del trabajo.

La crisis y el proceso de reformas han producido un triple efecto sobre este sector. En primer lugar, se ha debilitado económicamente como consecuencia de la dolarización de los precios de la mayoría de los bienes de consumo y servicios económicos y de la permanencia de salarios diseñados para un consumo subsidiado. En segundo lugar, se ha producido una reducción del sector, tanto relativa (disminución porcentual como consecuencia de la menor captación de fuerza de trabajo) como absoluta (expulsión de fuerza de trabajo de empresas e instituciones estatales), lo cual, de aplicarse con más rigor en la empresas productivas y de servicios económicos, conduciría a una virtual desproletarización. En tercer lugar, y quizás este sea el dato más relevante, se viene produciendo una fragmentación según la ubicación de los trabajadores en áreas privilegiadas por la nueva dinámica económica (con altos salarios y otros estímulos) o en sectores tradicionales mercado internistas. Se trata de una virtual remodelación de la clase obrera y los asalariados en general por el capital internacional. Esto pudiera consolidar en el futuro un remedo de "aristocracia obrera"-ligada al sector público o

privado-tendencialmente cooptable por el bloque tecnocrático empresarial.

Los agricultores

Otro componente estaría dado por los pequeños campesinos y productores agrícolas asociados en cooperativas que por diversas razones no han logrado un alto nivel de atesoramiento. Este sector había experimentado una gradual disminución absoluta desde el triunfo revolucionario, de manera que si en 1970 constituía el 11% de los empleados en el sector civil, en 1989 era sólo el 5%. Con la creación en 1993 de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), esta situación experimentó una dramática reversión y, aunque no existen estadísticas oficiales, se calcula que cerca de 400 mil personas han engrosado el sector de productores agrícolas y que el número podría crecer aún más en el futuro.

Por su trascendencia, vale la pena detenerse en la experiencia de las UBPC. Las UBPC fueron creadas como una respuesta estatal para obtener de manera descentralizada mejores rendimientos agrícolas. Una parte muy significativa de la tierra estatal fue cedida en posesión a grupos de trabajadores. El liderazgo cubano mostró sagacidad al no diluir las incapacidades estatales en el individualismo, promoviendo en su lugar organizaciones cooperativas y de gestión colectivas allí donde ha sido viable. Sin duda, la creación de las UBPC ha constituido el paso socializador más audaz dado por la Revolución Cubana en los últimos lustros.

Sin embargo, el establecimiento de las UBPC careció desde sus inicios de una clara percepción política, por lo que, dos años después, aún les marca con un sello utilitario e inmediatista. En un inicio las UBPC nacieron constreñidas burocráticamente al no contar con acceso libre al mercado y estar sujetas a los andamiajes administrativos de las empresas estatales. Desde fines de 1994 fue viabilizado el acceso al mercado, lo que sin lugar a dudas ha producido una dinamización de estas instituciones. Pero, sin otras acciones políticas, tal dinamización pudiera adoptar un curso específico en detrimento de sus papeles sociales y sus niveles de democracia interna. Un rasgo muy comentado de los proyectos cooperativos a nivel mundial han sido sus tendencias a evolucionar desde proyectos democráticos, equitativos y socialmente comprometidos a situaciones de oligarquización, creciente desigualdad y relaciones depredadoras con sus entornos sociales. La evitación de estos efectos no dependerá del éxito económico—si bien éste es indispensable—sino del diseño político general en que tales cooperativas se inserten.⁶

Los trabajadores por cuenta propia

Desde fines de 1993, con la legalización del trabajo por cuenta propia, han comenzado los negocios privados, fundamentalmente en la provisión de servicios y de alimentos. Aunque en el llamado "cuentapropismo" se esconden verdaderas fortunas que han logrado las mejores posiciones y afrontar con éxito la escalada impositiva no progresiva⁷ del gobierno, la inmensa mayoría de los negocios amparados bajo esta ley son pequeñas unidades individuales o familiares cuyos ingresos netos, aun cuando superan con mucho los percibidos por la mayoría de los trabajadores del sector formal, no permiten una base para la acumulación. Hacia febrero de 1994 existían en el país 142 mil cuentapropistas legalizados, cifra que había ascendido en junio a 160 mil y a 208,346 en enero de 1996. El crecimiento sostenido, sin embargo, no refleja exactamente la dinámica de este proceso. A la altura de la última fecha citada se habían producido 401,847 solicitudes de licencias y habían abandonado la actividad unas 158,597 personas, lo que habla de una alta inestabilidad. Sólo el 0.9% del total en activo se ubicaba en las áreas más lucrativas, los restaurantes privados, y el 27% en pequeños puestos de expendio de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por entonces el 26% de los cuentapropistas eran al mismo tiempo trabajadores del sector formal, el 30% desempleados, el 18% amas de casa (eufemismo que frecuentemente designa a la mujer desempleada) y el resto jubilados, lo que habla de un resultado discreto en cuanto al objetivo declarado de generación de empleos. El 73% de los portadores de licencias eran hombres, lo que lleva a pensar en un papel subordinado de la mujer como apoyo de la actividad económica. El 80% de los cuentapropistas legalizados poseía más de 9 grados de educación (García 1996). Nada indica que no podamos concebir a los cientos de miles de cuentapropistas cubanos como componentes objetivos del sujeto popular. Pero al mismo tiempo, ningún sitio pasivo en la estructura social garantiza que estos grupos, crecientemente educados en la acción individual, no puedan derivar en base social de la restauración capitalista en el país. Posiblemente sea aquí y en los nuevos grupos de cooperativistas agrícolas, donde se plantea el mayor reclamo de una nueva forma de hacer política en función de la continuidad socialista.

El desempleo

La sociedad cubana comienza a aprender a vivir con el fenómeno del desempleo. El Estado ha tratado de evitar por todos los medios el enraizamiento del desempleo abierto mediante la puesta en práctica de planes de adiestramiento laboral, la oferta de nuevas opciones de empleo (estatales o privadas) y la imposición de la expulsión de la fuerza de

trabajo supernumeraria. Pero la población desempleada debe seguir creciendo en los próximos años aun cuando la economía logre crecimientos efectivos, precisamente porque una de las condiciones para el crecimiento, de acuerdo con las pautas del nuevo esquema económico, es la expulsión de una fuerza de trabajo supernumeraria que pudiera ascender a 600 mil personas. Según cálculos extraoficiales, el desempleo abierto debe oscilar en torno a un 10% de la población económicamente activa. Sólo en Ciudad de la Habana, donde las ofertas de empleos son mayores que en otras zonas del país, se informaba algo más de un 8% de desempleo a fines de 1995.

Las nuevas coordenadas de la política

Contrariamente a las predicciones de la derecha acerca del inminente derrumbe del régimen cubano, éste ha mostrado una sorprendente capacidad para retener el poder político en medio de una aguda crisis económica y hacerlo contando a su favor con un apoyo ampliamente mayoritario de la población. Esto ha constituido una verdadera proeza política de repercusión continental y un legado invaluable para el movimiento popular a nivel mundial. Pero la valoración positiva no debe conducir a equívocos. Haber evitado el colapso económico y con ello la revancha contrarrevolucionaria de Miami, no significa haber garantizado la continuidad del proyecto socialista. Ha existido un precio. Y una de sus facetas es precisamente una alteración gradual de las relaciones sociales de poder que pudiera conducir a una restauración capitalista en el país.

La sociedad cubana experimenta un proceso de rearticulación de las alianzas sociales, que tienen su punto neurálgico en la relación biunívoca entre la burocracia tradicional y el bloque tecnocrático empresarial emergente. Como decía antes, la primera logró su consolidación como estamento en los setenta, con la implementación del modelo de crecimiento extensivo centralmente planificado y del proceso de institucionalización del sistema político. La crisis de los noventa resquebrajó muchas de sus capacidades regulativas, desde la asignación vertical y jerárquica de recursos hasta la producción de una ideología legitimadora creíble. Sin embargo, el sector burocrático ha mostrado una notable habilidad para manejar la irrupción del mercado y de los actores vinculados a éste, dada su capacidad para proporcionar el control social imprescindible para la acumulación a cambio de los excedentes económicos necesarios para la reproducción del proyecto sectorial de poder. En última instancia, los nuevos gerentes y empresarios provienen de su seno o han sido formados desde sus políticas en curso. Aquí reside

la esencia de la cada vez más usual invocación de un modelo chino edulcorado que enaltece sus logros económicos y consumistas y omite sus deprimentes resultados sociales, políticos, culturales y ecológicos.

Las principales limitaciones para el despliegue de esta relación de poder y la consiguiente consolidación de un nuevo bloque hegemónico, están dadas por factores coyunturales y estructurales. En el primer sentido, el estado actual de la reforma económica en Cuba aún mantiene una fuerte compartimentación de los sectores económicos. La acción del mercado es en este sentido limitada por el Estado, lo que dificulta las relaciones horizontales entre los distintos componentes mencionados e incluso dentro de cada sector. Salvo asociaciones muy difusas y aún de poca relevancia (como una recientemente anunciada "Asociación de Empresarios Españoles"), no hay grupos corporativos empresariales. Ello, además, circunscribe sus áreas de decisión al campo económico con poco acceso a las estructuras políticas propiamente dichas.

En el plano estructural, un rango de singularidad proviene de la precedencia de una revolución de vocación socialista, apoyada en una alianza de las clases populares con la élite política emergida del hecho revolucionario y animada por una cultura política solidaria y patriótica. Como antes anotaba, los signos de cautela mostrados por la dirigencia política frente al avance del mercado y de la reforma, no importa ahora la valoración técnica que merezcan, expresan la permanencia de este compromiso social básico. Sólo que esta condicionante estructural puede también ser diluida por la fuerza del mercado si no implica la renovación del propio bloque popular y su proyección como una fuerza autónoma y con posiciones políticas propias. Seguramente aquí también se requerirá mucha audacia, mucho más que la que los programadores económicos reclaman para llevar a buen término el acceso al mercado mundial.

Repensar el futuro desde la izquierda

Repensar al futuro cubano desde una perspectiva de izquierda es una necesidad que rebasa al marco nacional. La resistencia cubana en pos de su independencia nacional y de sus conquistas sociales despierta la admiración del mundo entero y vertebró un movimiento solidario de gran significado moral y político. Para todos esto es muy importante, pero no suficiente. Cuba ofrece otra oportunidad: la de ser un componente de un proyecto anticapitalista en formación que aun cuando tenga diferentes concreciones nacionales, sólo podrá ser viable a escala internacional. No tenemos más opción que movernos incesantemente, aunque nuestra marcha vaya acompañada de los ladridos de quienes están confluyendo en el marasmo de la desesperanza y el fatalismo.

Ante todo, se trata de la economía. Ningún proyecto político sería viable si no se apoya en una dinámica económica que garantice la reproducción ampliada. Pero si de socialismo hablamos, no se trataría de cualquier tipo de reproducción. Desde la economía, Cuba enfrenta retos de sobrevivencia muy agudos que no sólo se vinculan con su condición de país tercermundista, sino también con el efecto negativo del bloqueo norteamericano. Ello implica-desechada la autarquía-la aceptación de un conjunto de reglas de juego propias del mercado mundial en la era de la llamada globalización. Pero dicha estrategia no necesariamente conlleva la aceptación fatalista de tales reglas y mucho menos que sea imposible encontrar sendas alternativas que modifiquen sustancialmente los escenarios existentes.

El gobierno cubano ha dado muestras de una alta sensibilidad social que ya de por sí implica una base para construir la alternativa y ciertamente un sentimiento raro en las políticas públicas a nivel mundial. Pero de lo que se trata es de una variación sustancial del concepto mismo de desarrollo económico y del lugar del sujeto popular en el trazado de metas y diseño de acciones. Se trataría, en primer lugar, de la construcción de una economía popular entendida (y aquí empleo una definición muy usual) como el conjunto de actividades productoras o proveedoras de servicios realizadas por agentes individuales o colectivos que dependerían fundamentalmente para su reproducción de la continuada realización de su fondo de trabajo propio, y cuyo rasgo distintivo sería la autorregulación basada en principios solidarios y asociacionistas (Corraggio 1994).

En el caso cubano, esta necesidad remite al establecimiento de un entramado de relaciones horizontales que incluya proyectos autogestionarios, cooperativas de productores de bienes y servicios, asociaciones de consumidores y las propias instituciones políticas y estatales democráticas existentes en los territorios, de tal manera que las relaciones políticas solidarias actúen como un insumo condicionador de las conductas y dinámicas internas de las asociaciones. Esta ha sido una carencia básica de buena parte de las acciones de reforma económica emprendidas en Cuba, en unos casos por producir una atomización de los sujetos involucrados (por ejemplo, en el trabajo por cuenta propia) y, en otros, como es el caso de las UBPC, porque el principio asociacionista ha quedado constreñido al marco de las propias organizaciones y con fines productivistas muy utilitarios.

Sin embargo, la sociedad cubana contemporánea es testigo de la emergencia de formas de organización social, básicamente a nivel barrial, que intentan de manera incipiente ofrecer una alternativa de desarrollo y convivencia desde la comunidad, y superar así la tradicional antinomía

mercado-estado que ha llenado la discusión pública en Cuba durante años, y que trágicamente parece resolverse en favor del primero. A diferencia de experiencias similares en América Latina, aquí se trata de una práctica participativa que incluye a un sujeto altamente calificado y con una experiencia política considerable adquirida durante decenios de movilización y participación locales. Pero al igual que ellas, estos incipientes movimientos sociales y ciudadanos en Cuba sufren la incompreensión o la perspectiva utilitaria de los sectores burocráticos educados en el control y la asignación verticales de recursos y valores.⁸

Es, sin embargo, previsible que una buena parte de la economía cubana no será organizada siguiendo pautas cooperativas sino a partir de un patrón empresarial descentralizado, sea bajo el rubro de la propiedad estatal, mixta o privada. Ello dejaría resuelto un viejo reclamo en favor de mayores cuotas de descentralización, pero no necesariamente en función de la democratización y la socialización del poder. Dado que he discutido este punto en varios lugares, no me detengo en él ahora sino para argumentar que la descentralización que tiene lugar por la vía económico-administrativa (e inclusive mediante la transferencia de funciones del subsistema político al económico, potencialmente centralizador) está produciendo una fragmentación mayor del sujeto popular y el fortalecimiento de los sectores tecnocráticos, en la misma medida en que no conlleva un proyecto claro de ampliación de la participación y en que sus parámetros están severamente acotados por un criterio eficientista. De lo que se trata es de poner en práctica proyectos de cogestión y autogestión (según el tipo de economía y propiedad) de los trabajadores en las empresas, en sustitución del actual esquema de participación limitada, y con un funcionamiento más autónomo de los sindicatos.⁹

Para decirlo más claramente: es imposible continuar funcionando con eficacia política, ni argumentar que se avanza en la construcción democrática, mucho menos enfrentar la ofensiva mercantilista, si no se produce una ampliación de los espacios participativos sobre la base de una mayor autonomía de las organizaciones populares y de los procesos de participación en sí mismos. Ello tiene un costo. Digamos, por ejemplo, que un sindicato más beligerante y dispuesto a representar con "voz propia" los intereses de sus miembros pudiera provocar reservas en un capital extranjero poco sofisticado que busca maximizar ganancias al menor tiempo posible. O que el entramado burocrático existente vería con desagrado toda propuesta que fuese en detrimento de sus cuotas de poder. Costos nada insignificantes, pero en cualquier caso, costos imprescindibles.

Esta línea de análisis conduce a la necesidad de un rediseño del

sistema político, incluso en términos institucionales. Este rediseño debe reunir tres cualidades, contradictorias pero no excluyentes. En primer lugar, debe garantizar la unidad de la nación frente a la injerencia imperialista. En segundo lugar, debe fortalecer al sujeto popular y a sus organizaciones, entendiendo la complejidad creciente de aquél. En tercer lugar, debe dar cuenta de la diversidad social sobre la base de la hegemonía popular y de la subordinación negociada de los sectores emergentes no incluíbles en este rubro.

Un primer eslabón de esta cadena sería un subsistema municipal más capaz y más participativo, como espacio primario de concertación de intereses y negociación de la(s) política(s), en lo cual Cuba posee un valioso caudal de logros y experiencias (Dilla *et al.* 1993). En este contexto queda poco espacio para la forma tradicional de alimentación de las tomas de decisiones plasmadas en el plan económico centralizado: la agregación de demandas por parte de la población y su transmisión a través de mecanismos verticalistas. En un escenario de negociaciones el plan deberá ser indicativo y sus propuestas alcanzadas a través de la concertación o de medios económicos.

A nivel macro, se impone una redefinición de la manera como se constituyen los órganos gubernamentales representativos a los diferentes niveles. Hasta el momento la representación ha funcionado a partir del voto popular organizado por territorios. Ello ha incidido, por un lado, en la ausencia de representación en los gobiernos locales de grupos de trabajadores ubicados en los territorios o en la subrepresentación de sectores marginalizados como las mujeres. Por el otro, ha incidido en la erosión de las capacidades deliberativas de las instituciones representativas o en la recurrencia a ficciones legales con vista a asegurar esta representación donde es imprescindible. Un nuevo diseño sugeriría la composición de estas instituciones a partir de fuentes diferentes que satisfagan las exigencias de la representación territorial, sectorial y de intereses. Todo ello pasaría por la validación real del precepto legal que confiere a los órganos representativos los mayores poderes estatales en cada territorio.

El Partido Comunista de Cuba no podría ser ajeno a esta transformación, sino que tendría que ser su protagonista. Sólo él, organización centro del sistema político, con su más de medio millón de miembros educados políticamente en un compromiso medular con el socialismo, puede impulsar los cambios imprescindibles con los menores riesgos disruptivos, en aras de la consolidación de un genuino poder popular. Pero ello implicaría la propia transformación del Partido. Aquí se trataría de encontrar la forma de organización y funcionamiento más adecuada a las diferencias de intereses que serían reconocidas en los

ámbitos social y político. En un primer escenario óptimo, esto conduciría a un partido más democrático, abierto al debate y permisivo de tendencias en el marco de la unidad de propósitos estratégicos. Pero también podría conducir a un sistema multipartidista, particularmente si el Partido Comunista dejara de asumir su papel de vanguardia. En este sentido, un desplazamiento del sistema político en la dirección apuntada podría ayudar al surgimiento y desarrollo de opciones partidistas responsables y leales en la continuidad sistémica.

Finalmente, el lector debe tener presente que éstas son sólo reflexiones que aspiran a ser parte de un debate, nunca una propuesta alternativa. Cualquier propuesta alternativa tendrá que ser una obra colectiva de millones de personas que hoy miran al pasado con orgullo, garantizan el presente con ingentes esfuerzos y tienen total derecho a controlar el futuro de sus vidas.

NOTAS

¹ Los juicios aquí emitidos son de la absoluta responsabilidad del autor y no involucran a la institución donde trabaja.

² He discutido esta forma específica de organización societal, sus logros y contradicciones, en dos artículos anteriores (Dilla 1993, 1995). Por estas razones no me detengo más en este asunto cuya comprensión resulta vital para entender las complejidades de la situación presente.

³ El reconocimiento público de estos fenómenos políticos negativos y de la necesidad de una renovación en este sentido provino de los propios medios oficiales, lo que ha quedado explícito en varios documentos públicos y particularmente en el llamamiento efectuado por el Partido Comunista para una discusión popular en torno a la agenda de su IV Congreso. El texto de este llamamiento fue publicado por *Cuadernos de Nuestra América* No. 15, julio-diciembre de 1990. Lamentablemente la aguda crisis económica desatada desde 1990 sepultó este impulso inicial.

⁴ Una aproximación al proceso de reforma en Cuba, particularmente en sus primeros tres años, puede hallarse en Monreal y Rúa (1994).

⁵ Véase también el informe sobre el plan económico y social para 1996 presentado por el Ministro de Economía a la Asamblea Nacional de Poder Popular (*Granma* 1995). Aquí sólo me refiero a los depósitos en pesos cubanos. Obvio, por falta de información, la cantidad de dólares en manos de este sector, así como los miles de millones no depositados. Probablemente estos datos serían aún más sorprendentes.

⁶ Un análisis empíricamente fundamentado de las UBPC hasta mediados de 1994 puede encontrarse en Pérez y Torres (1996).

⁷ El gobierno cubano ha declarado su intención de establecer impuestos progresivos en el futuro, cuando posea información veraz sobre los volúmenes de venta e ingresos netos. Mientras tanto, el sistema establecido es fijo, lo que perjudica seriamente a los pequeños negocios en beneficio de aquellos que poseen un capital inicial suficiente y alienta la concentración en el sector cuentapropista.

⁸ Para una interesante aproximación a este tema en Cuba, véase Fernández y Otazo (1996).

⁹ Por razones de espacio no puedo detenerme en el papel actual de los sindicatos. Valga anotar, sin embargo, que los sindicatos han sido la organización sectorial cubana que ha mostrado una mayor valentía y originalidad política de cara al ajuste y la reforma. He analizado parcialmente este papel en un artículo anterior (Dilla 1996). Posterior a este ensayo, la celebración del XVII congreso de los sindicatos dio nuevas muestras del intento de los sindicalistas cubanos por producir una renovación de su accionar.

REFERENCIAS

- Banco Nacional de Cuba. (1995). *Informe económico de 1994*. Agosto.
- Comisión Estatal de Estadísticas de Cuba. (1989). *Anuario*.
- Comisión Estatal de Estadísticas de Cuba. (1983). *Comunicado acerca de los resultados del Censo de población y viviendas de 1981*. La Habana, agosto.
- Comisión Estatal de Estadísticas de Cuba. (1981). *Anuario*.
- Corraggio, José Luis. (1994). De la economía informal a la economía popular. *Nueva Sociedad* 131 (mayo-junio).
- Cuba Foreign Trade*. (1994). Julio-diciembre.
- Dilla, Haroldo. (1996). Comunidad, participación y socialismo: reinterpretando el socialismo cubano. En *La participación de Cuba y los retos del futuro*, compilado por Haroldo Dilla. La Habana: Centro de Estudios sobre América.
- Dilla, Haroldo. (1995). Cuba: ¿cuál es la democracia deseable? En *La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos*, compilado por Haroldo Dilla. La Habana: Centro de Estudios sobre América.
- Dilla, Haroldo. (1993). Cuba: la crisis y la rearticulación del consenso político. *Cuadernos de Nuestra América* 20.
- Dilla, Haroldo y otros. (1993). *Participación y desarrollo en los municipios cubanos*. La Habana: Editora Política.
- Fernández, Armando y Rubén Otazo. (1996). Comunidad, autogestión, participación y medio ambiente. En *La participación de Cuba y los retos del futuro*, compilado por Haroldo Dilla. La Habana: Centro de Estudios sobre América.
- García, Tania. (1996). ¿Cuentapropismo o economía popular? Ponencia presentada al taller "Municipios, economía local y economía popular", Centro de Estudios sobre América, La Habana, 7-8 de marzo.
- Giddens, Anthony. (1996). *Más allá de la izquierda y la derecha*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Granma*. (1996). 26 de marzo.
- Granma*. (1995). 27 de diciembre.
- Monreal, Pedro y Manuel Rúa. (1994). Apertura y transformación de la economía cubana: las transformaciones institucionales. *Cuadernos de Nuestra América* 21 (enero-junio).
- Pérez, Niurka y Cary Torres. (1996). UBPC: hacia un nuevo proyecto de participación. En *La participación en Cuba y los retos del futuro*, compilado por Haroldo Dilla. La Habana: Centro de Estudios sobre América.

RESUMEN

Una idea central que anima este artículo es que la reforma económica en Cuba está creando un entramado social básico que pudiera conducir a una restauración capitalista en el país. Otra idea central es que éste no es un resultado inevitable y que existen vías alternativas para la continuidad socialista que implicaría potenciar al sujeto popular en los nuevos escenarios creados. Cualquier valoración sobre la composición social de la población cubana y sus efectos en la política tiene que partir del hecho de que la Revolución iniciada en 1959 condujo a la virtual liquidación de los sectores burgueses y de buena parte de la clase media. La sociedad cubana, remitida así al concepto estricto de "pueblo", fue organizándose en torno al predominio de formas sociales y estatales de propiedad de los medios de producción. Al mismo tiempo, esta nivelación social fue acompañada de un fuerte proceso de movilidad ascendente de las mayorías, apoyado en programas estatales de provisión de empleos y de servicios sociales. Esta situación comenzó a experimentar un cambio radical cuando, a fines de los ochenta, la sociedad cubana se vio obligada a buscar su inserción al mercado mundial capitalista sobre bases competitivas y en consecuencia a producir un rediseño interno mediante lo que hoy se conoce como la "reforma económica". El artículo trata de describir las tendencias de cambio más visibles en la sociedad cubana contemporánea, especialmente las transformaciones socioclasistas. Se examinan particularmente el surgimiento de un nuevo bloque social tecnocrático-empresarial; los cambios en la clase obrera, los agricultores y los trabajadores por cuenta propia; y la nueva política estatal en Cuba. Estas reflexiones aspiran a ser parte de un debate, nunca una propuesta alternativa. Cualquier propuesta alternativa tendrá que ser una obra colectiva. [**Palabras clave:** reforma económica, reestructuración social, clases sociales, política estatal, Cuba, Revolución Cubana.]

ABSTRACT

A central idea that informs this article is that economic reforms in Cuba are creating a basic social texture that could lead to the reestablishment of capitalism in the country. Another central idea is that this is not an inevitable outcome and that there are alternative means for the continuation of socialism, which would imply maximizing the role of the popular sectors in the newly created scenarios. Any evaluation of the social composition of the Cuban population and its effects on politics must be based on the fact that the Revolution initiated in 1959 led to the virtual elimination of the bourgeois sectors and much of the middle class. Cuban society, thus defined strictly by the concept of a "people," gradually organized itself around the predominance

of social and state property of the means of production. At the same time, this social levelling was accompanied by a strong process of upward mobility for the majority of the people, supported by state programs of employment and social services provision. This situation began to experience a radical change when, toward the end of the 1980s, Cuban society was forced to insert itself in the capitalist world market on a competitive basis and therefore to redesign itself by means of what has come to be known as "economic reform." The article attempts to describe the most visible trends in changes within contemporary Cuban society, especially transformations in the class structure. The following topics are examined in some detail: the emergence of a new social bloc of technocrats and entrepreneurs; changes in the working class, the peasantry, and self-employed workers; and new state policies in Cuba. These reflections aspire to form part of a larger debate, never an alternative proposal. Any alternative proposal will have to be a collective work. [Keywords: economic reforms, social restructuring, social classes, state policies, Cuba, Cuban Revolution.]